

del Estado, en cuanto á que le impuso las penas de 25 días de prision, á reserva de conmutarla en cien pesos de multa, por violarse con ella la garantía otorgada en el artículo 16 de la Constitución federal.

Segunda: notifíquese, advirtiéndole al C. Valadéz la obligación que tiene de reponer el papel del sello correspondiente, mandando copias para su publicación al Boletín Oficial del Estado y al Semanario Judicial, y remitiendo los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión. El primer suplente en ejercicio del Juzgado de Distrito del Estado, C. Maximino Barragan, definitivamente juzgando, así lo proveyó y firmó por ante mí. Doy fé.—*Maximino Barragan*.—*Francisco Medina*, secretario.

Es copia que certifico. Mazatlan, Mayo 22 de 1873.—*Francisco Medina*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Julio 26 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Sinaloa por el C. José C. Valadéz, por considerar violadas en su persona las garantías que otorgan los artículos 16 y 24 de la Constitución general, con la pena de 25 días de prision que le impuso el C. Gobernador del Estado, por considerársele como redactor y responsable del número 14 del periódico "La Tarántula." Vistas las constancias de autos, y considerando: que ni la autoridad administrativa ni la judicial, pueden conocer de los delitos de imprenta, sometidos á la jurisdicción de los jurados en los términos prescritos por la ley vigente de imprenta; el hecho que motiva este juicio, importa una violación expresa de las garantías aducidas por el quejoso en su escrito de amparo; con tales fundamentos, se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Sinaloa, cu-

ya parte resolutive es como sigue: "La Justicia de la Union ampara y protege al C. José C. Valadéz, contra la resolución administrativa del Gobierno del Estado, en cuanto á que le impone las penas de 25 días de prision á reserva de conmutarla en cien pesos de multa, por violarse en ella la garantía otorgada en el artículo 16 de la Constitución federal.

Devuélvanse los autos al juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias*.—*Pedro Ogazon*.—*Juan J. de la Garza*.—*José M. Lozano*.—*José Arteaga*.—*P. Ordaz*.—*Ignacio Ramirez*.—*M. de Castañeda y Nájera*.—*M. Auza*.—*Simon Guzman*.—*Luis Velazquez*.—*José García Ramirez*.—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 9 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sonora por D. Mateo Ortiz, contra el auto decretado por el C. Juez de primera instancia del Distrito en 1º del próximo pasado, arraigándolo en Guaymas hasta presentar certificado de la Admon. de Rentas de estar solvente con la Hacienda pública.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El fiscal que suscribe, cree que ya no tiene objeto el presente juicio de amparo, supuesto que con la suspensión del acto, se

lo ha levantado al quejoso C. Mateo Ortiz el arraigo, quedando éste en completa libertad, y con la fianza que se ha ofrecido pueden quedar asegurados los derechos de la hacienda del Estado, entre tanto se resuelve si ha ó no lugar al cobro que se le hace por el C. Admor. de Rentas y que debe de la contribución ordinaria; por lo mismo, pido se sobresean.—Protesto lo necesario.—Guaymas, Julio 19 de 1873.—Lic. José Monteverde.—Es copia que certifico.—Guaymas, Setiembre 7 de 1873.—Monteverde.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Guaymas, Agosto 19 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Mateo Ortiz contra el auto decretado por el C. Juez de 1ª Instancia del Distrito con fecha 19 de Julio próximo pasado, imponiéndole formal arraigo en esta ciudad, hasta presentar el correspondiente certificado de solvencia con la hacienda del Estado, por considerar violada el quejoso con tal providencia, la garantía individual que le asegura el art. 16 de la Constitución general de la República; la suspensión previa é inmediata de dicha providencia dictada por este juzgado á petición del actor; el informe justificado de la autoridad ejecutora sobre lo principal, el pedimento fiscal relativo solicitando el sobreseimiento en el juicio; el auto en que se denegó esta petición por tenerse que resolver definitivamente la constitucionalidad del acto reclamado; la citación para sentencia, con cuanto mas consta de autos, y considerando: Que la autoridad ejecutora no alega en su informe (fojas. 7 fte. y vta.) otro fundamento de su providencia, que el art. 113 de la ley de justicia del Estado de 17 de Mayo de 1862. Que esta disposición no es aplicable al caso, 1º: porque ella solo establece como providencias precautorias los secuestros, depósitos, intervenciones, retenciones á que se

refieren manifiestamente á los intereses del deudor y no á su persona, 2º: porque para que éstas puedan dictarse legalmente, exige aquella la presentación del documento justificativo de la deuda ó en su defecto una información que la compruebe y la comprobación también de la urgencia de ellas, requisitos con que no cumplió el C. Admor. de Rentas al pedir el arraigo, limitándose á asegurar en la misma comunicación, que el peticionario debía algunos meses de contribución directa y no tenía bienes en que trabarse ejecución, contradiciendo este segundo aserto al día siguiente al participar oficialmente que estaba procediendo el embargo (fojas. 2 fte. y 3 fte. y vta.) 3º: porque la misma ley en su art. 118, fija duración á las repetidas providencias, previniendo se levanten si dentro del término antes señalado, seis días, no se entabla la demanda en forma, mientras que la de que se trata se dictó por tiempo indefinido, á saber, hasta que se acreditara el pago, cerrando así la entrada á todo juicio, á toda controversia sobre la legalidad del adeudo, 4º, y principalmente, porque para el aseguramiento y exacción de los derechos fiscales, el Estado ha adoptado por su decreto número 53 de 20 de Mayo de 1871 los procedimientos de la ley general de 20 de Enero de 1837, que confiere la facultad económico-coactiva exclusivamente á los empleados de Hacienda, prohibiéndoles á los jueces toda intervención en las atribuciones de aquellos mientras no se les comunique por los mismos estar asegurados dichos derechos (art. 1º y 18): Que tampoco la citada ley coactiva se extiende á procedimiento alguno contra la persona de los deudores, sino solamente á la clausura de su giro ó embargo de sus intereses en la cantidad suficiente: Que en consecuencia, sobre las violaciones que contiene la relacionada orden de arraigo de los arts. 17 y 19 de la citada Constitución, ha sido dictada por autoridad incompetente, cual lo era hasta entonces en el asunto, la judicial,

y no se ha motivado ni fundado la causa legal del procedimiento, violándose así la garantía individual invocada por el actor, esto es, la que le asegura el art. 16 del mismo Código; con tales fundamentos y de conformidad con lo prevenido en los arts. 101 de la repetida Constitución general de la República y 13 y 27 de la ley orgánica relativa de 20 de Enero de 1869, este Juzgado falla: La Justicia de la Unión ampara y protege al C. Mateo Ortiz contra el auto decretado por el C. Juez de 1ª instancia del Distrito en 19 del próximo pasado, arraigándolo en esta ciudad, hasta presentar certificado de la Admon. de Rentas de estar solvente con la Hacienda pública. Notifíquese; publíquese en los periódicos del Estado, y remítanse originales los autos á la Corte Suprema de Justicia para su revision. El Juez de Distrito de Sonora así lo decretó definitivamente, firmando con los testigos de su asistencia ordinaria.—*D. Elias G.—A.—P. del Rincon.—A.—Pastor Rodriguez.*

Es copia de su original que certifico.

Guaymas, Agosto 20 de 1873.—*Elias G.—A.—José Lopez.—A.—Pastor Rodriguez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Octubre 14 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 2 de Julio del corriente año, promovió en Guaymas ante el Juez de Distrito del Estado de Sonora, Don Mateo Ortiz, exponiendo: que se le habia notificado por el juzgado de 1ª instancia de ese punto, un mandamiento de arraigo en momentos de estar saliendo para negocios urgentes á la ciudad de Alamos: que tal procedimiento se fundó en que el promovente no ha satisfecho al Administrador de rentas, una cantidad que le cobra por contribucion ordinaria, cuando su resistencia al pago procede de que es contribuyen-

te al Distrito de Alamos: que dicho Juez de 1ª instancia es incompetente en el caso, y el procedimiento ilegal, porque la ley de 20 de Mayo de 1871, fija á los recaudadores el que deben emplear contra los recaudadores morosos; y que en esa virtud habiéndose violado en la persona del promovente las garantías que otorga el artículo 16 de la Constitución de la República, pidió el amparo concedido.

Vistas las constancias de autos y atenta la sentencia del Juez de Distrito en la que concede el amparo pedido, por cuanto á que el fundamento del arraigo recalamado ha sido una disposicion de la ley de administracion de justicia del Estado, disposicion inaplicable al asunto de que se trata, como dice el mismo Juez de Distrito; y por las razones que alega, siendo la ley del caso, la citada de 20 de Mayo de 1871. Por las razones expresadas del Juez de Distrito, en mérito de las cuales resulta la violacion de las garantías alegadas, y con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve: se confirma la sentencia del propio Juez de Distrito pronunciada en Guaymas á 19 de Agosto último, cuya parte resolutive dice: La Justicia de la Unión ampara y protege á Don Mateo Ortiz, contra el auto decretado por el C. Juez de 1ª instancia del Distrito en 19 del próximo pasado, arraigándolo en esta ciudad hasta presentar certificado de la administracion de rentas de estar solvente con la hacienda pública.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José María Lozano.—José Arteaga.—Pedro Orlaz.—M. de Castañela y Nájera.—J. M. del Cas-*

tillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—L. Velasquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Octubre 17 de 1873.—*Lic. Enrique Landa, oficial mayor.*

AMPARO.

Promovido ante el Juez de Distrito de Puebla por el defensor de Pedro Poseros, contra los procedimientos del Gefe político del Distrito de Chalchicomula, por haberlo juzgado como salteador y sentenciado á sufrir la pena de muerte.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito—

El Promotor fiscal evacuando el traslado que previene el auto que antecede, ante V. dice: que de lo que la autoridad responsable ha manifestado en su informe, que está de acuerdo con los hechos que refiere el C. Lic. Mariano Villanueva en su escrito de queja, se infiere que el reo Pedro Poseros, ha sido juzgado por la autoridad política de Chalchicomula, en virtud de la ley de 23 de Mayo del año próximo pasado, por haber sido acusado del delito de asalto. De ese mismo se infiere además, que dicha autoridad se sujetó en un todo, á los procedimientos que determina la ley citada, y que sentenció al reo, teniendo presente las circunstancias de la causa.

Estos hechos C. Juez, considerados de la manera que corresponde y que no necesitan probarse, por reconocerlos el interesado ó su representante legítimo, demuestran con bastante evidencia, que no hay en ellos infracción alguna constitucional en perjuicio de Poseros, pues la que se hace valer de parte de su defensor, que es la que otorga la fracción 4ª del art. 20 á todo procesado, dándola por cierta (cosa que no es) no da

resultado, supuesto que está en suspenso por el art. 1º de la ley de 18 de Mayo de 1871. En consecuencia, en el presente caso no procede el recurso interpuesto.

Sírvase V. C. Juez así determinarlo, con fundamento del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869.

Zaragoza, Abril 18 de 1873.—*Eugenio Sanchez.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Puebla de Zaragoza, Junio 6 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el defensor de Pedro Poseros, contra el C. Gefe político del Distrito de Chalchicomula, por haberlo juzgado como salteador y sentenciado á sufrir la pena del último suplicio; el escrito de queja; el informe de la autoridad responsable; el parecer fiscal; las pruebas rendidas y cuanto mas que ha debido verse. Considerando: que la queja se hace consistir, en que el procedimiento de la autoridad política de Chalchicomula, de haber juzgado y sentenciado á que sufra la pena de muerte Pedro Poseros, con arreglo á la ley de 18 de Mayo de 1871 como salteador, viola en su perjuicio las garantías que otorga la fracción 4ª del art. 20 de la Constitución; porque siendo una de las principales garantías que concede el Código fundamental de la República, el respeto á la vida del hombre, con privarle de los medios de defensa es evidente que se ha infringido ese artículo en la expresada fracción: que si bien es cierto que la ley, en virtud de la que ha procedido el C. Gefe político, da facultad para juzgar y sentenciar á los salteadores, respecto de quienes estan en suspenso algunas de las garantías que otorga la Constitución, así como tambien lo es, que el reo de quien se trata ha sido encausado con motivo del asalto que tuvo lugar el dia cinco de Marzo de este año, en el punto llamado "El Aviadero"; sin embargo, todas las presunciones que aparecen en